

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, por sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en los antecedentes RUC 2.201.185.566-4, RIT 321-2023, condenó a Victoria Ximena Hernández Vergara a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de dos unidades tributarias mensuales y a las accesorias legales, como autora de dos delitos de receptación de vehículo motorizado, en grado de consumado, sorprendidos en la comuna de Quilpué, el 25 de noviembre de 2022.

En contra de dicho fallo, la defensa de la sentenciada recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de siete de enero pasado, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:

Primero: Que el recurso se funda, primordialmente, en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, afirmando que tanto en el desarrollo del procedimiento como en el pronunciamiento de la sentencia se han infringido las garantías fundamentales que precisa, aseguradas por la Carta Fundamental, ya que el ingreso y registro efectuado por la policía no se ajustó a derecho, toda vez que no se encontraban autorizados para llevarlo a cabo y, además, se realizó sin respetar el estatuto de imputada de la acusada y el material probatorio obtenido mediante dicha diligencia fue valorado por el tribunal del fondo para sustentar su decisión de condena.



Explica que, del análisis de la prueba rendida, específicamente de la declaración de los funcionarios policiales a cargo del procedimiento, resulta palmario que en la diligencia de entrada y registro efectuada no se respetaron las garantías de la acusada. En concreto, sin perjuicio de que, en su concepto, resultaba evidente que poseía la calidad de imputada, en conformidad al artículo 7 del código adjetivo, no se respetó dicho estatuto, al no indicársele que tenía derecho a guardar silencio, a ser asistida por un abogado y a no otorgar su autorización para la entrada y registro. Asimismo, se efectuó de forma autónoma y sin norma que lo habilitara la diligencia de entrada y registro a su domicilio.

Refiere que se efectuaron diligencias investigativas en relación con la acusada, en concreto acudir a su domicilio en compañía de la denunciante, verificar la existencia de la camioneta en el domicilio y, por último, solicitarle la autorización de entrada y registro, lo anterior con el fin preciso de determinar si la camioneta estacionada dentro del domicilio de la acusada era, efectivamente, aquella que habría sido sustraída con anterioridad a la denunciante; es decir, se estaba investigando un hecho delictivo, en el cual la imputada debía ser tratada como tal.

En conclusión, se trató de diligencias ilegales, que transgredieron lo dispuesto en los artículos 7º, 93 letras b) y g) y, 205, todos del compendio adjetivo, ya que la acusada poseía la calidad de imputada cuando se concurrió por parte de la policía a verificar lo señalado por la denunciante y efectuar la diligencia de entrada y registro, lo cual queda de manifiesto cuando funcionarios policiales señalan expresamente a la acusada que se habría denunciado que en su domicilio se guardaba una camioneta que habría sido robada con anterioridad; como



corolario, debió ser tratada como tal e indicarle que tenía derecho a guardar silencio, a no auto incriminarse y a negarse a autorizar el ingreso, por lo que pide anular el juicio y la sentencia en su totalidad, solicitando se excluya del auto de apertura toda la prueba rendida por el Ministerio Público.

De manera subsidiaria, construye el arbitrio sobre el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, afirmando que la sentencia omitió los requisitos previstos en el artículo 342, letra c), en relación con el artículo 297 del mismo texto, particularmente el principio lógico del tercero excluido y el principio de razón suficiente.

Expone que, al momento de rechazar la teoría del caso de la defensa relativa a la valoración negativa de la prueba por haber sido obtenida con vulneración de garantías, los jueces de instancia efectuaron dos afirmaciones que estimaron como razonamientos verdaderos y lógicos, pero que en concepto de la defensa resultarían contradictorios. El primero, en cuanto la entrada y registro, que se lleva a cabo en el domicilio de la acusada, se sustenta normativamente en el artículo 206 del código adjetivo, al existir signos evidentes de que dentro de dicho inmueble se está cometiendo un delito. Concluye que la premisa lógica del tribunal —para desechar la petición de la defensa en orden a estimar que la diligencia de entrada y registro vulneró garantías fundamentales al haberse hecho de forma autónoma en un supuesto no habilitado legalmente— es que la policía se hallaba en el supuesto de la norma transcrita, es decir, que existían signos evidentes de la comisión de un delito dentro del inmueble, situación análoga a una hipótesis de flagrancia. En un segundo orden de ideas, respecto de la argumentación para desechar el reclamo de la defensa en orden a que no se dio lectura a los derechos



de la imputada, específicamente, a que tenía derecho a negarse a autorizar la entrada y registro, se indica por parte de la magistratura de instancia que, en conformidad al artículo 7° del Código en estudio, se adquirió la calidad de imputada una vez que consultadas las patentes —esto es, una vez dentro del domicilio— se confirmó que las camionetas tenían encargo vigente por robo.

A juicio de la articulista, la judicatura da por establecido el delito de receptación, en concreto el elemento subjetivo del tipo penal, con infracción del principio de razón suficiente. Esta aseveración se sustenta en que el tribunal dio por probado como elemento troncal para tener por acreditado el conocimiento del origen ilícito de los vehículos, que uno de los vidrios de las camionetas se encontraba quebrado y que las llaves no eran originales. Dicha conclusión no se desprende del material probatorio rendido, puesto que se rindieron como medios de prueba de cargo fotos de ambas camionetas y no se observa vidrio alguno roto; tampoco se periciaron las llaves, ni se rindió fotos de las supuestas llaves que no eran originales. Asimismo, se rindió prueba pericial, que nada dice sobre estos puntos. Pero lo fundamental es que declaran ambos funcionarios policiales que sacan las fotos de dichos vehículos y que los presencian *in situ*, no indicando nada sobre vidrios quebrados, circunstancia que habría sido relatada únicamente por la víctima. Por esta causal pide anular la sentencia y el juicio oral, ordenando la realización de un nuevo juicio oral.

Como segunda causal subsidiaria, funda su arbitrio en la causal contenida en el artículo 373, letra b) del compendio procesal penal, refiriendo que el hecho acreditado por parte de los sentenciadores sería una conducta atípica, ya que el tribunal de instancia se hace cargo en su fundamentación sobre el elemento del



tipo, empero no se da por probado en el hecho acreditado, ya que no hay mención alguna al conocimiento del origen ilícito de la especie —el cual sí es referido en la acusación—. Conocer —o no poder menos que conocer— el origen ilícito de las especies es parte del tipo penal, pues la ley exige como requisito *sine qua non* que la conducta acreditada en el considerando séptimo se realice con dicho elemento subjetivo impropio. La frase “conociendo su origen”, alude al dolo directo, en tanto que la expresión “no pudiendo menos que conocerlo”, al eventual.

Por lo anterior, solicita se invalide únicamente la sentencia y se dicte una de reemplazo en la que se absuelva a la acusada del cargo formulado en su contra como autora de dos delitos consumados de receptación de vehículo motorizado.

Finalmente, y como tercera causal de invalidación subsidiaria, funda el recurso también en la causal prevista en el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, afirmando haberse incurrido en una infracción al artículo 75 del Código Penal, pues afirma que se trata de un solo hecho constitutivo de dos delitos, no resultando aplicable la regla del artículo 456 bis A, del mismo cuerpo legal. Por lo anterior, solicita que se invalide únicamente la sentencia y se dicte una de reemplazo que condene a la acusada a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autora de dos delitos de consumados de receptación de vehículo motorizado, y se le sustituya la pena privativa de libertad en los términos de la Ley 18.216.

Segundo: Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada, en su motivo duodécimo, tuvo por acreditado que, “...1°.- *Que el 25 de noviembre de 2022, alrededor de las 15:10 horas, la acusada Victoria Ximena Hernández Vergara, fue sorprendida por*



funcionarios de Carabineros, teniendo en su poder, en su domicilio, ubicado en calle Asado Al Palo N° 2731, Quilpué, dos vehículos motorizados previamente sustraídos, uno de ellos la camioneta marca Nissan, de color blanco, año 2018, modelo NP300, Patente KPRJ.77, sustraída a Marcela Alejandra Ormazábal Medina desde calle 3 Poniente de Viña del Mar, según da cuenta el Parte Policial N° 5679, de 20 noviembre del 2022, de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar; y la camioneta marca Nissan, color blanco, modelo NP300, Patente KBKX.81, sustracción ocurrida en el sector de Maitencillo, comuna de Puchuncaví, denunciada por robo por parte de Carlos Giuseppe Domenicone Crovo, el día 19 noviembre 2022, según consta Parte N° 409, del Retén de Carabineros de Maitencillo, Tenencia Puchuncaví, y en los informes respecto de las denuncias de robo de las camionetas Patentes KBKX.81 y KPRJ.77, así dio cuenta la propietaria de la camioneta Patente KPRJ.77, Marcela Alejandra Ormazábal Medina, sobre la sustracción de su camioneta el 19 noviembre del 2022, y de la denuncia efectuada en la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, quien informó que pudo observar por las cámaras de un edificio cercano el momento en que unos sujetos rompían el vidrio trasero izquierdo de su vehículo, llevándoselo, siendo posteriormente recuperado en un inmueble de la comuna de Quilpué, junto a otro vehículo, el que también tenía un vidrio trasero roto; respecto de la recuperación de los vehículos dieron cuenta los funcionarios de Carabineros de Quilpué Eduardo Vera Cárdenas y Eduardo Martínez Agüero, ocurrido el 25 de noviembre de 2022, alrededor de las 15:10 horas, en que a instancias de Marcela Ormazábal Medina, concurrieron al domicilio ubicado en calle Asado Al Palo N° 2731, Quilpué, habitado por Victoria Ximena Hernández Vergara, lugar en que



encontraron el vehículo de propiedad de ella, camioneta marca Nissan, de color blanco, año 2018, modelo NP300, Patente KPRJ.77, y de la camioneta marca Nissan, color blanco, modelo NP300, PPU KBKX.81.

2°.- Que las referidas especies, correspondían a dos camionetas marca Nissan, color blanco, modelo NP300, Patentes KPRJ.77 y KBKX.81, inscritos a nombre de Marcela Alejandra Ormazábal Medina y Carlos Giuseppe Domenicone Crovo, las que habían sido sustraídas desde la vía pública, la primera, la Patente KPRJ.77, sustraída a Marcela Alejandra Ormazábal Medina desde calle 3 Poniente de Viña del Mar, según da cuenta el Parte Policial N° 5679, de 20 noviembre del 2022, de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar y la Patente KBKX.81, sustracción ocurrida en el sector de Maitencillo, comuna de Puchuncaví, denunciada por robo por parte de Carlos Giuseppe Domenicone Crovo, el día 19 noviembre 2022, según consta Parte N° 409, del Retén de Carabineros de Maitencillo, Tenencia Puchuncaví.

3°.- Que el conocimiento que la agente tenía del origen ilícito de los vehículos que mantenía en su poder, dentro de su domicilio, se desprende del hecho de que efectivamente se encontraban dentro de su domicilio, tapados, con uno de su vidrios quebrados, las lunetas traseras, que efectivamente no le pertenecían dichos vehículos sino que a Carlos Giuseppe Domenicone Crovo y a Marcela Alejandra Ormazábal Medina, los cuales habían sido sustraídos previamente, y que si bien mantenían las llaves para hacerlas funcionar, ellas no eran las originales, indicios que permiten establecer que la responsable sabía que los vehículos tenía un origen ilícito, sin que hubiere justificado la legítima adquisición de éstos. Además, la explicación entregada por la encausada para



justificar la presencia de los vehículos en su domicilio, no resultó verosímil, lo que también refuerza el conocimiento del origen ilícito del vehículo que conducía”.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos de dos delitos de receptación de vehículos motorizados, previsto y sancionado en el artículo 456 Bis A del Código Penal, en grado de consumado.

En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el fundamento decimoquinto del fallo impugnado estableció que *“la Defensa de la acusada alegó la ilicitud del procedimiento, al afectarse la garantía de inviolabilidad del hogar — solo planteado en el alegato de inicio— y al no haberse indicado los derechos a la acusada e ingresar al inmueble sin una orden y, en subsidio, pide la absolución por no haberse acreditado los hechos, al no probarse el elemento subjetivo, del conocimiento de la ilicitud del origen de las camionetas, fundado en la propia declaración prestada en la audiencia.*

Al respecto, se debe estar, principalmente, a lo indicado en los fundamentos duodécimo, decimotercero y decimocuarto anterior, en que se describen los elementos que generaron la convicción necesaria para llegar a una decisión condenatoria.

Respecto de la ilicitud de la diligencia realizada por Carabineros, se rechazará dicha pretensión, ya estos jueces estimaron que los funcionarios policiales, se ajustaron precisamente a las normas que los autoriza para actuar autónomamente, esto es, ante la denuncia de un delito, que podía estarse cometiendo, en este caso, que en un domicilio se encontraba una camioneta sustraída previamente, por lo que en virtud de las facultades autónomas y autorizadas por el Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 87 del



Código Procesal Penal faculta al Fiscal Nacional entregar instrucciones generales, autorizando el uso de las facultades de los funcionarios policiales frente a hechos de los que tomaren conocimiento, para realizar diligencias, al señalar ‘Sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal impartiere en cada caso, el ministerio público regulará mediante instrucciones generales la forma en que la policía cumplirá las funciones previstas en los artículos 83 y 85, así como la forma de proceder frente a hechos de los que tomare conocimiento y respecto de los cuales los datos obtenidos fueren insuficientes para estimar si son constitutivos de delito.

Asimismo, podrá impartir instrucciones generales relativas a la realización de diligencias inmediatas para la investigación de determinados delitos’, lo que se debe relacionar con los artículos 205 y 206 del Código Procesal Penal...

...Teniendo presente lo expuesto precedente, este Tribunal estimó que no existió vulneración a las normas de la actividad autónoma de las policías, se arribó a la conclusión anterior, luego de haber analizado la prueba rendida, especialmente los dichos de los funcionarios de Carabineros Eduardo Vera Cárdenas y Eduardo Martínez Agüero, quienes dieron cuenta del procedimiento realizado el 25 de noviembre de 2022, ya que la víctima del Marcela Alejandra Ormazábal Medina había podido establecer el lugar en que se encontraba su camioneta robada el 19 de noviembre de 2022, por lo que fue a dar aviso a Carabineros, quienes concurrieron con la denunciante al domicilio de calle Asado Al Palo N°2.731, Quilpué, llegando al lugar se entrevistaron con la dueña de casa, Victoria Hernández Vergara, a quien se le informó que estaban denunciando que en el interior de su domicilio, en el patio, se encontraba una camioneta color blanca, encargada por robo, por lo que autorizó el ingreso voluntario, y en la



práctica los funcionarios policiales se encontraban ante un delito flagrante de Receptación, por lo que de igual forma podrían haber ingresado, confirmando que se trataba de la camioneta de Marcela Ormazábal Medina y, en la misma oportunidad, encontraron la camioneta marca Nissan, color blanco, modelo NP300, PPU KBKX.81, que había sido sustraído el 19 noviembre 2022 desde Maitencillo, por lo anterior, los funcionarios policiales podían realizar la diligencia en forma autónoma, sin necesidad de recibir instrucciones por parte del Ministerio Público.

Se debe tener presente, que una de las principales funciones de Carabineros de Chile, en relación a hechos de carácter ilícito, consiste en la prevención de la comisión de delitos, al ser garantes del orden público y la seguridad pública interior, además de ser un organismo auxiliar del Ministerio Público en la investigación de ilícitos, y en ese sentido, como lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía, en relación a la investigación de hechos punibles, y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación, dentro de las cuales se encuentran el control de identidad y la detención por flagrancia.

En ese contexto, el artículo 83 del Código Procesal Penal establece, expresamente, el marco reglamentario de la intervención policial, sin orden previa o instrucción específica de los fiscales, admitiendo su gestión sin necesidad de autorización previa cuando se trata de prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en situación de flagrancia con arreglo a la ley, resguardar el sitio del suceso, identificar testigos y consignar sus declaraciones voluntarias en los



supuestos que enuncia, recibir las denuncias del público y desarrollar las demás diligencias que dispusieren otros cuerpos legales, como las indicadas en el artículo 206 del Código Procesal Penal, como por ejemplo la entrada y registro en lugares cerrados sin autorización u orden, aún sin el consentimiento expreso de su propietario o encargado ni autorización u orden previa, cuando las llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior u otros signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito.

Por lo anterior, si bien se puede señalar que la regla general de la intervención policial se hace bajo las órdenes o instrucciones del Ministerio Público, y como excepción, su desempeño autónomo en la ejecución de pesquisas y detenciones en precisos y determinados casos reglamentados claramente por el legislador, con el objeto de eliminar o reducir al máximo la discrecionalidad en el actuar policial, susceptible de derivar restricción de derechos.

Es por ello que, frente a la existencia de un posible delito, que se aprestan a cometer, que se está cometiendo o, que se acaba de cometer, los funcionarios policiales puedan actuar inmediatamente, e incluso, detener a una persona, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 letra b) en relación al artículo 130 del Código Procesal Penal, en los casos de flagrancia.

Como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema 'Dicha preceptiva procura conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos a través de la subordinación de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al organismo encargado



por ley de la referida tarea, los que a su vez se desenvuelven conforme a un estatuto no menos regulado —y sujeto a control jurisdiccional— en lo atinente a las medidas que comprometen los derechos constitucionalmente protegidos de los habitantes’ (SCS N° 20.415-15 de 15 de diciembre de 2015).

Este es el escenario fáctico, sobre el cual cabe decidir si, en el caso concreto, se observó el necesario equilibrio contemplado por la ley entre los derechos de los involucrados en el ilícito, las facultades generales de la policía y la eficacia de la persecución penal y, en este caso, según se indicó, los funcionarios policiales contaban con el antecedente de la posible comisión de un delito, el de Receptación, que se estaba cometiendo en un lugar cerrado, al que la encargada dio su autorización para el ingreso, por lo que no se requería de algún otro antecedente o autorización para proceder en la forma que lo hicieron.

Por otra parte, se debe tener presente, que al resolver en estos casos, se deben considerar las circunstancias particulares del hecho y realizar un análisis de la situación, pudiendo estos Jueces descartar una actuación arbitraria de los agentes estatales en el desempeño de sus labores preventivas, arbitrariedad que no se observa en la especie por las razones ya tratadas.

Por estas mismas razones, lo expuesto por la propia acusada, al declarar en el juicio, y lo indicado por los funcionarios policiales, no se afectó la inviolabilidad del hogar, toda vez que fue la propia acusada quien autorizó el ingreso de los funcionarios al domicilio, sin perjuicio, que al establecerse la presencia de las dos camionetas robadas, se encontraban ante un delito flagrante.

En relación al hecho de no haberse dado cumplimiento a la información de derechos a la acusada previo a solicitarle el ingreso a la propiedad e indicarle la



posibilidad de negarse a autorizar dicho ingreso, lo cierto es que se debe rechazar estos argumentos, ya que el ingreso a la propiedad fue autorizado y una vez confirmado por los funcionarios policiales que efectivamente estaban ante un delito de Receptación, sin que se vislumbre, de forma alguna, que se hubieren infringido los derechos de la acusada, quien al momento de ser detenida se le leyeron los derechos.

Además, debe tenerse presente que la calidad de imputada y el ejercicio que de dicha condición se desprenden, se produce en el momento en que la investigación se dirige en su contra, desarrollando cualquier tipo de actuación que tenga a la persona como imputada, lo que en este caso, como se dijo anteriormente, se produce al momento de establecer fehacientemente que se trataba de las dos camionetas robadas, momento en el cual se le dieron a conocer los derechos a la acusada, quien ejerció el derecho de guardar silencio.

Por las razones anteriores, a este Tribunal no se le generó duda en cuanto a que los funcionarios policiales actuaron amparados por las normas legales vigentes, razón por la que sólo cabía desechar las alegaciones de la Defensa, en este sentido.

Sobre las alegaciones de la Defensa, basadas en la declaración de la acusada, al indicar que solo accedió a guardar las camionetas por una cantidad de dinero, desconociendo que eran robadas, pero sin poder indicar antecedentes de aquellas personas que habrían llevado los vehículos, por lo que el tribunal estimó que inverosímil su explicación, por lo que no fue capaz de justificar la legítima adquisición de los vehículos.



Además, la acusada, para justificar la falta de conocimiento del origen ilícito de las camionetas, lo hace consistir en que los vehículos no presentaban indicios de fuerza o daño alguno en sus puertas, chapas y vidrios, que diera la impresión de haber sido producto de un robo, lo se vio desvirtuado con el mérito de las probanzas descritas en el fundamento octavo, en especial, con la prueba documental presentaba, esto es, Acta de asesoramiento de fecha 25 de noviembre de 2022 del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile, de las dos camionetas marca Nissan, color blanco, modelo NP300, Patente KBKX.81 y KPRJ.77, en la que se constata que si bien las placas patente eran las originales y correspondían a los números de serie de motor y chasis, y que no presentaban daños en las chapas de las puertas ni en sus chapas de encendido, las llaves no eran las originales y presentaban la luneta trasera quebrada, la derechos, respecto el primer vehículo y la izquierda respecto del segundo, que correspondía a la camioneta de Marcela Alejandra Ormazábal Medinay, quien informó que al ser sustraída, pudo ver en el video cuando rompían la luneta trasera izquierda, condición en que se encontraba al ser recuperado su vehículo y que la otra camioneta también tenía la luneta trasera quebrada, circunstancia que desvirtúa lo señalado por la acusada.

Por lo anterior, ninguna duda ha merecido el relato de la testigo Ormazábal Medina, y sus dichos y lo consignado en los documentos antes descritos, no obstante, no haber sido señalado por los funcionarios policiales que dieron cuenta del hallazgo del vehículo.

Respecto de la camioneta marca Nissan, color blanco, modelo NP300, PPU KBKX.81, de propiedad de Carlos Giuseppe Domenicone Crovo se estableció que



había sido sustraída el 19 noviembre 2022, según Parte N°409, del Retén de Carabineros de Maitencillo, de la misma fecha, así se encuentra consignado en el Informe de denuncia incorporado como prueba documental y ¿del acta de asesoramiento del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, por lo que el delito base de la receptación fue acreditado suficientemente, aún con la ausencia del propietario del vehículo antes indicado, vehículo que sigue a su nombre, según el Certificado del Registro de Vehículos Motorizados, por lo que también cabía rechazar las alegaciones de la Defensa, por estas razones.

En virtud de lo señalado anteriormente, no se ha generado ningún tipo de duda respecto de la responsabilidad de la acusada en los hechos, sin que se demostrara que los testigos de cargo pudieran haber faltado a la verdad por algún motivo espurio, por lo que no se vislumbra ningún tipo de ganancia o animadversión, que pudiera hacer presumir que estando faltando a la verdad.

Finalmente, tal como se indicó en el fundamento decimotercero, nos encontramos ante dos delitos, al tratarse de la Receptación de dos vehículos, por lo que se de aplicar la norma sobre reiteración de este tipo de delitos del inciso 5° del artículo 456 bis A del Código Penal.

Por las razones vertidas precedentemente, sólo cabía rechazar las alegaciones de la Defensa, al haberse establecido, más allá de toda duda razonable la existencia de los hechos y la participación de la acusada en los mismos, en calidad de autora”.

Tercero: Que, en relación con la causal de nulidad deducida en carácter de principal, en cuanto por ella se han denunciado como conculcadas garantías fundamentales, en especial, la del debido proceso, conviene señalar que este es



un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, a la luz del cual, toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto, el artículo 19, N°3, inciso sexto de la Constitución, confiere al legislador la misión de definir las precauciones de un procedimiento racional y justo.

Sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen, a lo menos, un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones ante los tribunales, que sean escuchados, que puedan impugnar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (entre otras, SCS N°s 6.902-2012, de 6 de noviembre de 2012; 6.250-2014, de 7 de mayo de 2014; 33.771-2017, de 3 de agosto de 2017; y, 36.787-2017 de 14 de septiembre de 2017, entre otras).

Bajo este prisma, interesa tener presente que diligencias intrusivas como la entrada y revisión de un lugar cerrado, que naturalmente implican la afectación de resguardos de índole constitucional, como la intimidad y la inviolabilidad del hogar —invocados por la defensa—, no podrán estimarse conculcadas si en su práctica se han respetado las formas que la ley ha introducido en pos de una real persecución penal que respete tales prerrogativas esenciales.

Cuarto: Que, en lo concerniente al logro de evidencias, es necesario afirmar, como premisa básica, que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como



fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que quebranta dicho sistema debe ser excluido del mismo. En este sentido, Hernández Basualto afirma que *“el Estado está obligado de modo especial a velar por el irrestricto respeto de las garantías fundamentales y a evitar sin más los efectos ilegítimos de los atentados de que son objeto, (...) de no verificarse la exclusión de la prueba obtenida con inobservancia de tales garantías fundamentales el Estado estaría usando como fundamento de una eventual condena el resultado de una vulneración constitucional”* (Hernández Basualto, Héctor (2005). “La exclusión de la prueba ilícita en el nuevo proceso penal chileno”, en Colección de Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, N° 2, pp. 65-66).

Quinto: Que, a fin de resolver sobre la pretendida vulneración de garantías constitucionales, cabe acudir a las circunstancias en que se produjo el ingreso y registro al domicilio ubicado en calle Asado Al Palo N°2.731, Quilpué; luego, a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, a efectos de poder determinar si éstas han sido transgredidas y, después de ello, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales de la acusada.

Sexto: Que, esta Corte Suprema ya ha señalado en sentencias dictadas previamente que el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla



general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (entre otras, SCS N°s 7.178-2017, de 13 de abril de 2017; 9.167-2017, de 27 de abril de 2017; y, 8.258-2018, de 5 de julio de 2018).

Es así como el artículo 83 del Código aludido establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales, permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a), practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b), resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera (letra c), identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d), recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Así, sólo en las condiciones que establece la letra c) recién señalada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias de investigación.

En lo que atañe a la entrada y registro de un domicilio particular, el artículo 205 del Código Procesal Penal requiere que el propietario o encargado del recinto consienta expresamente en la práctica de la diligencia o que se obtenga anuencia del Juez en caso en que se presumiere que el imputado –o medios de comprobación del hecho investigado– se encontrare en un determinado lugar. Por su parte, el artículo 206 de ese ordenamiento permite la entrada y registro sin el asentimiento ni la autorización antes indicados, ante las llamadas de auxilio de



personas que se hallaren en el interior o si otros signos evidentes indicaren que en el local se está ejecutando un injusto, o si existe algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que provengan de o pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito.

Séptimo: Que, de la normativa reseñada puede inferirse que la regla general de la intervención policial estriba en que ésta se lleva a cabo bajo las órdenes o instrucciones del Ministerio Público, y, por excepción, su desempeño autónomo en la ejecución de pesquisas, en precisos y determinados acontecimientos enumerados claramente por el legislador, que incluso ha fijado un deslinde temporal para su vertiente más gravosa (las detenciones), con el objeto de eliminar o reducir al máximo la discrecionalidad en el actuar policial susceptible de derivar en restricción de derechos.

Dicha preceptiva procura conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, mediante la subordinación de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al organismo encargado por ley de la referida tarea, esto es, el Ministerio Público, el que a su vez se desenvuelve conforme a un estatuto no menos regulado —y sujeto a control jurisdiccional— en lo concerniente a las medidas que comprometen los derechos constitucionalmente protegidos de los habitantes.

Octavo: Que la determinación del necesario equilibrio contemplado por la ley entre los derechos del involucrado en el ilícito y la eficacia de la persecución penal importa traer a colación el contexto fáctico que rodeó la diligencia



cuestionada. En efecto, es un hecho establecido en la sentencia que el día 25 de noviembre de 2022, alrededor de las 15:10 horas, luego de recibir la información entregada por la afectada por el robo de su vehículo, quien precisó el domicilio en el cual presuntamente se encontraba la camioneta sustraída, personal policial concurrió hasta el inmueble incriminado, lugar en el cual se entrevistaron con la acusada, quien autorizó voluntariamente el ingreso de los funcionarios de Carabineros, lugar en el que fueron halladas dos camionetas que habían sido sustraídas previamente, las cuales se encontraban tapadas, con uno de sus vidrios quebrados –las lunetas traseras– y que, si bien mantenían llaves para hacerlas funcionar, ellas no eran las originales.

Por ello, los supuestos sobre los cuales descansan los cuestionamientos del recurso resultan difíciles de admitir, en cuanto se sostienen en alegaciones de ilegalidad que no concurren en la especie.

En efecto, el control efectuado tuvo como justificación las circunstancias relatadas en el motivo decimoquinto de la sentencia recurrida, a las que se ha hecho referencia, y que se consideraron suficientes para ingresar al domicilio mediante la autorización voluntaria brindada por la señora Hernández Vergara, lugar en el cual se produce el hallazgo de las especies incriminadas y que permitieron efectuar su detención en situación de flagrancia.

No debe olvidarse que los funcionarios policiales practicaron la diligencia previa información brindada por la víctima de un delito en que resultó sustraída su camioneta, unido a las instrucciones generales que ha dado el Fiscal Nacional del Ministerio Público, lo que constituye un antecedente suficiente para que, aun de no mediar la autorización voluntaria para el ingreso, dado por la acusada, los



efectivos policiales pudiesen, de todas formas, acceder al mismo y proceder a su detención y a la incautación de las especies incriminadas.

En relación con el acceso voluntario al inmueble, cuestionado por la defensa, el fallo explicitó, en el mismo fundamento decimoquinto, que los policías dieron cuenta que se pidió autorización a la acusada para llevar a cabo tal diligencia en su domicilio, quien entonces no tenía la calidad de imputada, lo cual únicamente aconteció al momento de comprobar que en el lugar se ocultaban tanto el vehículo sindicado por la víctima, como otro que mantenía un encargo vigente por robo.

En síntesis, la diligencia se lleva a cabo con la autorización voluntaria que otorga Hernández Vergara, habitante del inmueble, por lo que el permiso fue dado por una persona autorizada para consentir en la realización de la diligencia, de manera que no es posible sostener que se infringieron las garantías constitucionales alegadas por la defensa.

Noveno: Que, en suma, la actividad policial objetada, al contrario de lo afirmado, ha sido desplegada dentro de los márgenes legales, por lo que no se aprecia inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie, de modo tal que no pueden aceptarse los fundamentos esgrimidos por el recurso respecto de la afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Décimo: Que, en lo que atañe a la primera causal subsidiaria invocada, contemplada en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el



derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es fruto de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o derivar de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre la justificación de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón

Undécimo: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieren por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 ya citado. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba,



únicos o plurales, por los cuales se dieren por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Duodécimo: Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido como de la conducta desplegada por la acusada.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto de los delitos pesquisados, fundado en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por la defensa da cuenta de una mera discrepancia con la conclusión referida a la forma de atribuir participación a la acusada, juicios que el tribunal sustentó suficientemente, como se advierte del motivo decimoquinto, por lo que la imputación relativa a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

Decimotercero: Que, en lo que respecta tanto a la segunda como a la tercera causal de invalidación propuestas a título subsidiario, para que esta Corte pudiese analizar los supuestos errores de derecho atribuidos a la sentencia



debiese haberse demostrado, junto con las causales postuladas, un yerro en la forma en la cual el tribunal estableció los hechos, toda vez que las protestas de la articulista se fundan en hechos diversos a aquellos asentados soberanamente por los sentenciadores fondo.

En efecto, la segunda causal subsidiaria de invalidación supone que el tribunal no hubiese establecido como un hecho que la acusada conociera o no pudiera menos que conocer el origen de las especies incriminadas. Sin embargo, de la atenta lectura de los hechos fijados por el tribunal en el fundamento duodécimo de la sentencia en revisión, resulta prístino que el tribunal estableció, como un hecho de la causa, acreditado mediante la prueba de cargo, que la acusada conocía el origen ilícito de las especies, de forma tal que era necesario, a través del motivo de nulidad idóneo al efecto, derribar tal aserto para que la protesta de la defensa pudiese prosperar, situación que no se verifica en la especie.

Decimocuarto: Que la misma situación ocurre con la tercera causal de invalidación propuesta en carácter subsidiario, en que la articulista pretende subsumir el castigo por la comisión de dos delitos, bajo la fórmula dispuesta por el legislador en el artículo 75 del código de castigos, en el entendido que un mismo hecho fuese constitutivo de más de un delito.

Sin embargo, el tribunal tuvo como asentados hechos diversos, toda vez que los delitos base para la receptación de ambos vehículos se verifican en momentos claramente diferenciados. Para que la hipótesis de la defensa pudiese prosperar, la sustracción de ambos vehículos debió acontecer en un único momento, como por ejemplo cuando las especies se encuentran en un mismo



contenedor o vehículo de transporte, situación que no ha acontecido, de manera tal que el recurso no podrá prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 374 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de la acusada Victoria Ximena Hernández Vergara, contra la sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintitrés y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes RUC 2.201.185.566-4, RIT 321-2023, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Valdivia.

N°247.384-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por el Ministro Sr. Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Cristina Gajardo H. y María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C. y Sr. José Miguel Valdivia. No firman la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausentes respectivamente.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogado Integrante Jose Miguel Valdivia O. Santiago, veintisiete de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de enero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

